

CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS

A LA MESA DEL CONGRESO

El GP MIXTO, a instancia del diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN** al Gobierno **sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego** para su debate en el PLENO.

Madrid, a 9 de octubre de 2025

Néstor Rego Candamil

Diputado del BNG

Portavoz del Grupo Mixto



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector pesquero gallego, clave para la economía de Galicia, se enfrenta en la actualidad a numerosos problemas y amenazas que, de no resolverse, ponen en grave riesgo su futuro y, con él, el de nuestro país en su conjunto.

Todos los datos económicos avalan que la pesca gallega sigue siendo una actividad económica con un elevado poder de arrastre para la economía de Galicia, pues se relaciona de forma directa e indirecta con muchos otros sectores. La pesca en Galicia debe considerarse una actividad industrial ya que, para producir, precisa la competencia de otros sectores de actividad económica y del sector servicios y porque, debido a su interconexión, cualquier cambio conlleva consecuencias económicas para todos los demás. La pesca gallega tiene la función de abastecer de un alimento básico y de calidad, tanto para el mercado interno como para la exportación. Además, es un sector con una gran capacidad de adaptación que le ha permitido incorporar nuevas tecnologías en los campos de la detección, la información, la seguridad y la comunicación. Así, afrontó todos los retos que exige la Política Pesquera Común, incluso las continuas reducciones de las posibilidades de pesca.

Una reducción de cuotas que tiene su origen en el llamado principio de estabilidad relativa, base de la Política Pesquera Común, y que implicaba un reparto en función de las capturas del momento, datos sobre los que se realizaron revisiones posteriores, pero sin alterar la proporción del reparto inicial y, por tanto, sin tener en cuenta la evolución y necesidades de las distintas flotas. Con este criterio, países que nunca habían pescado determinadas especies partían de cuotas muy elevadas, mientras que las flotas pesqueras que más necesitaban cuotas para mantener el ritmo económico actual, como era el caso de la flota gallega, se encontraron desde el principio con una reducción de su capacidad extractiva y continuas reducciones posteriores que fueron drenando la vitalidad del sector.

Así pues, es preciso impulsar esta reforma necesaria, para adoptar una política pesquera que refleje las necesidades y capacidades reales de los diferentes Estados miembros y que permita a Galicia mantener y desarrollar su sector pesquero.

Por otra parte, es necesario que Galicia sea reconocida como Zona de Alta Dependencia de la Pesca, lo que implicaría una mayor protección del sector ya que facilitaría el acceso a cuotas y a la financiación de la actividad productiva. Esta categoría implica, tal y como se recoge en el Anexo VII de la Resolución de La Haya de 1976, que deben tenerse en cuenta las necesidades vitales de las poblaciones que dependen de la pesca. Posteriormente, este



concepto se incluyó también en la normativa europea, que define una zona altamente dependiente de la pesca como «una cuenca de empleo (o conjunto de poblaciones) donde la contribución del sector pesquero a la actividad de la zona es tal que las dificultades de este sector dan lugar a reducciones de actividad y pérdidas de empleo que deterioran gravemente el tejido socioeconómico», condiciones que claramente se dan en el caso de Galicia.

Otra cuestión que debe abordarse es la participación de Galicia en la negociación y toma de decisiones que le afectan directamente, como la pesca. Galicia debe tener voz propia para defender sus intereses sin ataduras ni limitaciones y, para ello, debe reconocerse su capacidad para negociar directamente y que las cuestiones en materia de pesca u otras que afecten a sus competencias no puedan ser adoptadas sin su consentimiento y aceptación.

En el momento actual, otra de las principales amenazas que afecta directamente al sector pesquero gallego es la prohibición de las artes de fondo en 87 zonas del Atlántico Nororiental. Una decisión que no contó con el apoyo unánime del Consejo, ni la aprobación del Parlamento Europeo, además de ser adoptada sin informes científicos actualizados, sin ningún tipo de diálogo ni con el sector ni con los Estados afectados y sin una evaluación socioeconómica de su impacto, pero que acaba de ser avalada el pasado mes de junio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, desestimando los recursos interpuestos por la OPP de Burela y el Estado español.

En una sentencia tan controvertida y tan inexplicable como la propia decisión de la CE, se condenan por igual todas las artes de fondo, sin tener en cuenta los efectos de cada una de ellas sobre los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV), situando al mismo nivel la pesca de arrastre de fondo y la pesca con palangre, aunque reconociendo que el impacto de las artes fijas sobre los ecosistemas «es potencialmente menor». Tampoco tiene en cuenta las consecuencias sociales y económicas que implica la decisión de la CE, no respetando claramente lo establecido en la propia Política Pesquera Común y, mucho menos, la sentencia del mismo Tribunal de enero de 2024, que avaló la decisión adoptada por la UE respecto a fijar cuotas para una serie de especies, teniendo en cuenta no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la sostenibilidad social y económica.

En su intervención durante la interpelación que tuvo lugar el pasado miércoles, el ministro de Agricultura anunció el compromiso de recurrir la sentencia desestimatoria, una acción necesaria, pero también es necesario mantener una actitud de defensa del sector y exigir la modificación de la normativa sobre los EMV y excluir los palangres de la consideración de arte de fondo. Asimismo, el Gobierno debe exigir que no se amplíen las zonas prohibidas y



que cualquier revisión esté precedida de los informes técnicos y científicos pertinentes y del máximo respeto a los principios de sostenibilidad.

Otra amenaza inminente para el sector pesquero es la posibilidad de instalar parques eólicos marinos sin información adecuada sobre las consecuencias sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos y sin tener en cuenta la afectación sobre la actividad pesquera. Por ello, el sector reclama que, como mínimo, se posponga el desarrollo de la regulación de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones situadas en el mar hasta que finalicen los análisis e informes que está elaborando el IEO.

En relación con las cuotas, resulta de especial relevancia, en primer lugar, exigir que, para la fijación de nuevas propuestas de reparto, se tenga en cuenta el contenido de la sentencia de 11 de enero de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE, antes citada, que reconoce la importancia de atender cuestiones sociales y económicas y no solo medioambientales a la hora de fijar las cuotas de las distintas especies y, así, evitar la paralización de la flota. Pero, en el momento actual, debe prestarse especial atención a la situación de la flota de cerco y artes menores que dependen principalmente de la pesca de sardina. Las posibilidades de pesca en esta pesquería se gestionan de forma compartida entre el Estado español y Portugal, sin embargo el reparto inicial entre ambos estados no se realiza de forma proporcionada, ni teniendo en cuenta la capacidad de las respectivas flotas (66% para Portugal y 33% para todo el Estado español). Tampoco el reparto interno entre las distintas áreas obedece a las capacidades de las flotas, como evidencia que tradicionalmente, las flotas pesqueras del Cantábrico y del Noroeste acaban la cuota que tienen asignada, mientras que el *xeito* y el Golfo de Cádiz no la consumen y, aunque han ido aportando el sobrante al mecanismo de optimización (o «bolsa común») mediante la cual, finalmente, se reasignan las cuotas no consumidas, hasta ese momento, las flotas del Cantábrico y del Noroeste se ven obligadas a comprar cuota a la flota pesquera del Golfo de Cádiz.

En definitiva, es preciso apostar por el incremento inicial de cuotas, atendiendo a la recuperación de la biomasa y abundancia de sardina, revisar el acuerdo bilateral y el reparto desigual entre España y Portugal atendiendo al número de buques, así como el reparto dentro de las flotas del Estado español atendiendo a las capacidades pesqueras de cada flota.

En otro orden de cosas, debemos destacar la importancia de los servicios que prestan las Capitanías Marítimas y el Instituto Social de la Marina (ISM), esenciales en el desarrollo ágil y correcto de gran parte de las gestiones que deben realizar los trabajadores y trabajadoras del mar. Sin embargo, se está produciendo una progresiva pérdida de personal e



incluso el cierre de servicios en algunas zonas y, por tanto, un empeoramiento de la atención, cuestión que afecta directamente a la actividad.

En el caso del ISM, además de la continua reducción de personal de sus oficinas, urge atender la falta de plazas en los cursos, incluso en el caso de los que son obligatorios para que los trabajadores y trabajadoras del mar puedan ejercer su trabajo, la falta de médicos en los distintos puntos para realizar los reconocimientos previos al embarque, y también la demora en la tramitación de pensiones y prestaciones.

Por otro lado, el nuevo contenido del Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Navegación Marítima, que entró en vigor el 15 de agosto, impone una serie de cambios administrativos que obligan a la presentación digital y al rol electrónico, que ahora sustituye al sellado presencial del libro de navegación en las Capitanías. Esto implica que el volumen de trabajo en las Capitanías y Distritos disminuirá, pero que se incrementará notablemente para los trabajadores y trabajadoras directamente afectados, muchos de ellos sin preparación digital alguna, así como para las Cofradías, que ya vienen realizando desde hace tiempo el trabajo que en muchos casos corresponde a la propia Administración.

Además, hay que recordar otras cuestiones de gran relevancia para las personas trabajadoras del mar y que, pese a haber sido ya incluidas en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, permanecen, a día de hoy, sin avances. En primer lugar, la ley establece en la Disposición Adicional Octava la obligación de las autoridades laborales de promover, mediar y favorecer la consecución de convenios colectivos que garanticen condiciones laborales dignas para los tripulantes de la pesca de gran altura, de altura y litoral. Cabe señalar que el ámbito de acción en esta materia corresponde principalmente al Gobierno del Estado y que es básico para avanzar en el reconocimiento de mejores condiciones de empleo que, a su vez, favorezcan el relevo generacional en las flotas pesqueras.

En segundo lugar, el contenido de la Disposición Adicional Séptima de esta misma norma, que implicaba una esperanza para los cientos de personas que, aún hoy, se encuentran, en la práctica, sin posibilidad de ejercer su derecho al voto. Así, se encomienda al Gobierno que, en el plazo de tres meses, remita a las Cortes, una propuesta para el establecimiento de un procedimiento telemático y/o electrónico que se adapte a las necesidades específicas del personal embarcado que no pueda acceder al sistema de voto por correo debido a sus estancias en alta mar, coincidiendo con la convocatoria o celebración de la jornada electoral.



Sin embargo, hoy, más de dos años después de la entrada en vigor de la Ley, nada se sabe sobre la posibilidad de poner en práctica medidas en este sentido.

Y por último, la Disposición final segunda de la Ley de Pesca Sostenible, que a su vez modifica la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, introdujo una nueva Disposición Adicional en esta última para exigir la elaboración de un Catálogo de Enfermedades Profesionales específicas de los trabajadores y las trabajadoras del mar, atendiendo de forma específica a las condiciones de penosidad y la exposición a agentes físicos que sufren las personas que se dedican a la recogida de marisco, tanto a pie como a flote, al cultivo de mejillón en batea, a la recogida de percebes en roca, así como a las personas que practican la apnea para la recolección de recursos específicos. Sin embargo, tampoco hay avances en esta cuestión, imprescindible para el reconocimiento de las enfermedades profesionales entre las personas trabajadoras del sector pesquero.

Por último, también es preciso mencionar la demanda unánime del sector de acometer la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a los productos pesqueros del 10% al 0% para equiparar los productos del mar al resto de alimentos de primera necesidad.

Cabe recordar que el pescado es un alimento básico y esencial en una dieta sana y equilibrada. De hecho, diversas autoridades y organizaciones internacionales y estatales de salud y nutrición indican que su consumo es beneficioso para la salud cardiovascular, y las propias instituciones de la Unión Europea han recomendado esta medida, como en la denominada Estrategia «De la Granja a la Mesa», que propone permitir elegir un tipo nulo de IVA para los alimentos saludables y sostenibles. Sin embargo, el Gobierno sigue negando esta posibilidad, pero la eliminación del IVA a los productos pesqueros serviría para favorecer la introducción de más pescado en la dieta, un hábito saludable que repercutiría positivamente en el gasto sanitario derivado de las múltiples enfermedades que se relacionan con una mala alimentación. Es decir, se facilitaría el acceso al consumo de estos productos a familias y a personas con mayores dificultades económicas, a la vez que se ayuda al sector a incrementar las ventas.

Por todo lo anterior, el Bloque Nacionalista Galego presenta la siguiente MOCIÓN:

«El Congreso insta al Gobierno a:



1. Impulsar la revisión y modificación de las bases de la Política Pesquera Común Europea, empezando por el principio de estabilidad relativa.
2. Avanzar en el reconocimiento de Galicia como Zona de Alta Dependencia Pesquera y en la capacidad de participación directa en la toma de decisiones en materia pesquera.
3. Recurrir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la prohibición de la pesca con artes de fondo en 87 zonas del Atlántico, sin que sustente en informes científicos rigurosos, sin tener en consideración las consecuencias económicas y sociales y además equiparando el palangre con el arrastre de fondo.
4. Reclamar a la Unión Europea que abandone la propuesta de aumentar el número de zonas cerradas a las artes de fondo y que cualquier decisión al respecto se adopte sobre la base de estudios rigurosos sobre las consecuencias sociales y económicas y para la sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos.
5. Rechazar el recorte del 67% (o cualquier otro que pueda producirse) de los fondos europeos destinados a la pesca propuesto por la Comisión Europea para el nuevo marco presupuestario 2028-2034.
6. Acordar una moratoria en el desarrollo de la regulación de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones situadas en el mar hasta que se concluyan los análisis e informes que el IEO está elaborando sobre los impactos negativos sobre el sector pesquero y los ecosistemas marinos.
7. Realizar las acciones necesarias ante la Unión Europea para conseguir un aumento del TAC de sardina en 2026, negociar un reparto de la cuota de sardina con Portugal para el nuevo acuerdo bilateral equilibrado y teniendo en cuenta el número de buques y tripulantes de cada uno de los dos Estados, realizar un nuevo reparto de la cuota de sardina entre las zonas 8c y 9a de forma proporcional y atendiendo al número de buques y tripulantes de cada una de ellas y eliminar cualquier tipo de compraventa de posibilidades de pesca.
8. Mantener abiertas todas las oficinas del ISM en Galicia, reforzando su plantilla para poder prestar los servicios para los que es competente de forma ágil y eficaz. Para ello, se procederá a la cobertura de forma inmediata del personal facultativa de los centros de salud marítimos de Galicia para evitar retrasos que impidan los embarques. Asimismo, garantizar la oferta de plazas suficientes en los cursos obligatorios que imparte el ISM para los trabajadores y trabajadoras del mar y habilitar un periodo temporal no inferior a seis meses para la formación y adaptación de los trabajadores y trabajadoras del mar a los requerimientos del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima durante el cual los trámites digitales ahora obligatorios se sigan realizando por parte de las Capitanías Marítimas.
9. Cumplir los mandatos de la Ley de Pesca Sostenible y proceder a la elaboración de un Catálogo de Enfermedades Profesionales de las personas trabajadoras del mar; promover, mediar y favorecer la consecución de convenios colectivos que garanticen



condiciones de trabajo dignas para los tripulantes y elevar a las Cortes una propuesta para el establecimiento de un procedimiento telemático y/o electrónico que se adapte a las necesidades propias del personal embarcado que no puede acceder al sistema de voto por correo debido a su estancia en el mar.

10. Reducir al 0% el IVA aplicado al pescado y productos pesqueros al tratarse de un alimento básico y de primera necesidad dados los beneficios demostrados que este alimento tiene en una dieta sana y sostenible, su contribución a la reducción del gasto sanitario, además del efecto positivo en el ahorro de las familias y la dinamización económica del sector de la pesca, como demuestran numerosos informes y estudios.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

09 OCT. 2025 17:47:20

Entrada **84757**

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE

Competencia
Tipo Expediente

Otros Expedientes
300-Escrito en lengua
española distinta del
castellano, oficial en
Comunidad Autónoma (art.
92.1)

Fdo.: Néstor REGO CANDAMIL
Portavoz Titular



Á MESA DO CONGRESO

O GP MIXTO, a instancia do deputado do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 184.2 do vixente Regulamento do Congreso dos Deputados, presenta a seguinte **MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN** ao Goberno **sobre as medidas necesarias para impulsar o sector pesqueiro galego** para o seu debate en PLENO.

Madrid, a 9 de outubro de 2025

Néstor Rego Candamil

Deputado do BNG

Portavoz do Grupo Mixto



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O sector pesqueiro galego, clave na economía da Galiza, enfréntase na actualidade a numerosos problemas e ameazas que, de non resolverse, poñen en serio risco o seu futuro e, con el, o do conxunto do noso País.

Todos os datos económicos avalan que a pesca galega segue sendo unha actividade económica cun elevado poder de arrastre para a economía da Galiza, pois relaciónase de forma directa e indirecta con moitos outros sectores. A pesca na Galiza debe considerarse unha actividade industrial posto que, para producir precisa da concorrencia doutros sectores da actividade económica e do sector servizos e por que, polo seu encadeamento, calquera cambio comporta consecuencias económicas en todos os demais. A pesca galega ten a función de abastecedora dun alimento básico e de calidade, tanto para o mercado interno como para a exportación. Ademais, é un sector cunha grande capacidade de adaptación que lle permitiu incorporar as novas tecnoloxías no ámbito da detección, información, seguridade e comunicación. Así, asumiu todos os retos exixidos pola Política Pesqueira Común, mesmo as continuas reducións das posibilidades de pesca.

Unha redución de cotas que ten orixe no chamado principio de estabilidade relativa, base da Política Pesqueira Común, e que implicou un reparto atendendo as capturas daquela altura, datos sobre os que se fixeron as posteriores revisións, mais sen alterar a proporción do reparto inicial e, por tanto, sen atender á evolución e necesidades das distintas froas. Con este criterio, países que nunca pescaran determinadas especies partiron de cotas moi elevadas, mentres que as froas pesqueiras que máis necesitaba cota para manter o ritmo económico da actualidade, como foi o caso da frota galega, encontrou unha redución da súa capacidade extractiva desde o primeiro momento e continuas rebaixas posteriores que foron drenando a vitalidade do sector.



Así pois, é preciso impulsar esta necesaria reforma, para adoptar unha política pesqueira que recolla as necesidades e capacidade reais dos distintos Estados membros e que permita á Galiza manter e desenvolver o seu sector pesqueiro.

Por outra parte, é necesario que se recoñeza á Galiza o carácter de Zona Altamente Dependente da Pesca, que implicaría unha maior protección do sector pois facilitaría o acceso a cotas e financiamento da actividade produtiva. Esta categoría implica, tal e como xa se recollía no Anexo VII da Resolución da Haia de 1976, que se deban ter en conta as necesidades vitais das poboacións que dependen da pesca. Posteriormente, este concepto tamén foi recollido pola normativa europea, que define zona altamente dependente da pesca como “unha conca de emprego (ou grupo de poboacións) onde a contribución do sector pesqueiro para a actividade da zona é tal que as dificultades deste sector dan lugar a reducións de actividade e perdas de emprego que deterioran seriamente o tecido socioeconómico”, condicións que claramente existen no caso da Galiza.

Outro dos temas que debe abordarse é a participación da Galiza na negociación e na toma de decisións que lle afectan de forma tan directa, como é a pesca. Galiza debe contar con voz propia para defender os seus intereses sen ataduras nin limitacións e, para iso, deber recoñecérselle capacidade para negociar directamente e que, as cuestións en materia de pesca ou outras que afecten ás súas competencias ,non poidan ser adoptadas sen contar co seu consentimento e aceptación.

No momento actual, outra das principais ameazas que está afectando directamente ao sector pesqueiro galego é a prohibición de artes de fondo en 87 áreas do Atlántico Nororiental. Unha decisión que non contou nin co apoio unánime do Consello, nin coa aprobación do Parlamento europeo, ademais de adoptarse sen informes científicos actualizados, sen ningún tipo de diálogo nin co sector nin cos Estados afectados e sen avaliación socioeconómica sobre o seu impacto, mais que vén de ser referendada no pasado mes de xuño por sentenza do Tribunal de Xustiza da UE, desestimando os recursos que interpuxeran a OPP de Burela e o Estado español.



Nunha sentenza tan polémica e tan inexplicábel como a propia decisión da CE, condénase a todas as artes de fondo por igual, sen ter en conta os efectos de cada unha delas nos Ecosistemas Mariños Vulnerábeis (EMVs), pondo ao mesmo nivel o arrastre de fondo e o palangre, aínda recoñecendo que o impacto das artes fixas sobre os ecosistemas “é potencialmente menor”. Tampouco ten en conta as consecuencias sociais e económicas que implica a decisión da CE, non respectando dun xeito evidente o establecido na propia Política Pesqueira Común e, moito menos, a sentenza do mesmo Tribunal de xaneiro de 2024, que avalou a decisión que tomara a UE a respecto de fixar as cotas dunha serie de especies atendendo non só á sustentabilidade ambiental, senón tamén á social e á económica.

Na súa intervención durante a interpelación que decorreu o pasado mércores, o Ministro de Agriculturas anunciou o compromiso de recorrer a sentenza desestimatoria, unha acción necesaria, mais tamén é preciso que manteña unha actitude de defensa do sector e que exixa a modificación do regulamento sobre EMVs e se exclúa ao palangre da consideración de arte de fondo. Así mesmo, o Goberno ten que demandar que non se amplíen as zonas vedadas e que calquera revisión vaia precedida dos informes técnicos e científicos pertinentes e do máximo respecto polos principios de sustentabilidade.

Outra ameaza inminente para o sector pesqueiro é posibilidade de instalación de parques eólicos mariños sen contar coa adecuada información das consecuencias sobre a biodiversidade e os ecosistemas mariños e sen ter en conta a afectación na actividade pesqueira. Por iso, o sector reclama que, no mínimo, se aprace o desenvolvemento da regulación da produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar até contar coas análises e informes que está a desenvolver o IEO estean finalizados.

En relación coas cotas, ten especial relevancia, en primeiro lugar exixir que, para a fixación de novas propostas de reparto se atenda ao contido da sentenza de 11 de xaneiro de 2024 do Tribunal de Xustiza da UE, antes citada, que recoñece a importancia de atender as cuestión sociais e económicas e non só as medioambientais á hora de fixar as cotas nas distintas especies e, así, impedir



a paralización da frota. Mais, no momento actual, debe prestarse especial atención á situación da frota do cerco e de artes menores que dependen principalmente da pesca da sardiña. As posibilidades de pesca nesta pesqueira xestiónanse de forma compartida entre o Estado español e Portugal, porén o reparto inicial entre amos estados non se realiza de forma proporcionada, nin atendendo á capacidade das respectivas froas (66% para Portugal e 33% para todo o Estado Español). Tampouco o reparto interno entre as distintas áreas obedece ás capacidades das froas, como evidencia que tradicionalmente, o cerco do Cantábrico e Noroeste acabe a cota que se lles asigna, mentres que o xeito e o Golfo de Cádiz, que non chegan a consumila e, aínda que veñen achegando o sobranse ao mecanismo de optimización (ou “bolsa común”) mediante o que, finalmente, son reasignadas as cotas non consumidas, até ese momento, a frota do Cantábrico e Noroeste vese na obriga de comprar cota ao cerco do Golfo de Cádiz.

En definitiva, é preciso pular polo incremento inicial das cotas, atendendo á recuperación da biomasa e abundancia de sardiña, revisar o convenio bilateral e o reparto desigual entre España e Portugal atendendo ao número de buques, así como tamén o reparto dentro das froas do Estado español atendendo as capacidades de pesca de cada froa.

Noutra orde de cousas, debemos destacar a importancia dos servizos prestados polas Capitanías Marítimas e polo Instituto Social da Mariña (ISM), esenciais no desenvolvemento áxil e correcto de grande parte das xestións que teñen que levar a cabo os traballadores e traballadoras do mar. Porén, vense rexistrando unha perda progresiva de persoal e mesmo o fechamento de servizos nalgúns zonas e, por tanto, dun empeoramento da atención, cuestión que afecta directamente á actividade.

No caso do ISM, ademais da continuada redución do cadro de persoal das súas oficinas, é urxente atender a falta de oferta de prazas nos cursos, incluso no caso dos que son obrigatorios para que os traballadores e traballadoras do mar poidan desempeñar o seu traballo, a falta de facultativos en distintos en



distintos puntos para levar a cabo os recoñecementos previos ao embarque, e tamén a demora na tramitación de pensións e prestacións.

Por outro lado, a novo contido do Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima, que entrou en vigor o pasado 15 de agosto, impón unha serie de cambios administrativos que obrigan ao despacho dixital e ao rol electrónico, que substitúe agora ao selado presencial nas Capitanías da libreta de navegación. Isto implica que diminuírá o volume de tramallo nas Capitanías e nos Distritos, mais que vai verse incrementado sensibelmente para os traballadores e traballadoras directamente afectados, moitos deles sen preparación dixital algunha, así como para as Confrarías, que xa veñen realizando dende hai tempo o traballo que en moitos casos corresponde á propia Administración.

Alén do máis, deben lembrarse outras cuestións de grande relevancia para as persoas traballadoras do mar e que, a pesar de teren sido xa incluídas na Lei 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sustentábel e Investigación pesqueira fican, aínda a día de hoxe, sen avances. En primeiro lugar, a lei establece na Disposición Adicional Oitava a obriga para as autoridades laborais de promover, mediar e favorecer a consecución de convenios colectivos que garantan condicións laborais dignas ás persoas tripulantes na pesca de grande altura, altura e litoral. Cabe destacar que, o ámbito de actuación nesta materia corresponde principalmente ao Goberno do Estado e que é básico para avanzar no recoñecemento de mellores condicións no emprego que, á súa vez, favorezan a remuda xeracional nas frotas pesqueiras.

En segundo lugar, o contido na Disposición Adicional Sétima desta mesma norma, que implicou unha esperanza para os centos de persoas que, aínda a día de hoxe, queda, na práctica sen posibilidade de exercer o seu dereito ao voto. Así, encoméndase ao Goberno que, no prazo de tres meses, remita ás Cortes unha proposta para o establecemento dun procedemento telemático e/ou electrónico que se adapte ás necesidades propias do persoal embarcado que non pode acceder ao sistema de voto por correo polas súas estancias en alta mar, coincidindo coa convocatoria ou celebración da xornada electoral. Porén, hoxe,



máis de dous anos despois da entrada en vigor da Lei nada se sabe sobre a posibilidade de pór en práctica medidas neste sentido.

E finalmente, a Disposición final segunda da Lei de Pesca Sustentábel que modifica á súa vez a Lei 47/2015, de 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro, introduciu unha nova Disposición Adicional nesta última para exixir a elaboración dun Catálogo de Enfermidades Profesionais propias dos traballadores e traballadoras do mar, atendendo de forma específica ás condicións de penosidade e exposicións a axentes físicos que sofren as persoas que se dedican á recollida de marisco, tanto a pé como a frote, ao cultivo do mexillón en batea, á recollida de percebes na rocha, así como os mergulladores en apnea para a recolección de recursos específicos. Porén, tampouco hai progresos nesta cuestión, imprescindible para o recoñecemento de enfermidades profesionais ás persoas traballadoras no sector pesqueiro.

Por último, é preciso facer tamén mención á demanda unánime do sector para acometer a rebaixa do Imposto do Valor Engadido (IVE) aplicado aos produtos pesqueiros de 10% a 0% para equiparar os produtos do mar co resto de alimentos de primeira necesidade.

Debe lembrarse que o peixe é un alimento básico e esencial nunha dieta sa e equilibrada, de feito, distintas Autoridades e organizacións de saúde e nutrición internacionais e estatais, indican que o seu consumo é beneficioso para a saúde cardiovascular e as propias institucións da Unión Europea teñen recomendado esta medida, como na chamada Estratexia da Granxa á Mesa, en que se propón permitir elixir un tipo nulo de IVE para os alimentos saudábeis e sustentábeis. Porén, o Goberno segue negando esa posibilidade, mais a eliminación do IVE aos produtos pesqueiros serviría para favorecer a introdución de máis peixe na dieta, hábito saudábel que incidiría positivamente no gasto sanitario derivado das múltiples enfermidades que se relacionan cunha mala alimentación. É dicir, facilitaríase o acceso ao consumo destes produtos ás familias e persoas con maiores dificultades económicas, á vez que se axuda ao sector para incrementar as vendas.



Por todo o exposto anteriormente, o Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte MOCIÓN:

“O Congreso insta o Goberno a:

1. Impulsar a revisión e modificación das bases da Política Pesqueira Común europea, a comezar polo principio de estabilidade relativa.
2. Avanzar no recoñecemento da Galiza como Zona Altamente Dependente da Pesca e na capacidade de participación directa na toma de decisións en materia pesqueira.
3. Recorrer a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que avala a prohibición de pesca con artes de fondo en 87 zonas do atlántico, sen que estivese sustentada en informes científicos rigorosos, sen ter en consideración as consecuencias económicas e sociais e ademais equiparando o palangre ao arrastre de fondo.
4. Reclamar á Unión Europea que abandone a proposta de aumentar o número de zonas vedadas ás artes de fondo e que calquera decisión ao respecto sexa adoptada sobre a base de estudos rigorosos sobre as consecuencias sociais, económicas e para a sustentabilidade e o equilibrio dos ecosistemas mariños.
5. Rexeitar o recorte de 67% (ou calquera outro que se poida producir) nos fondos europeos destinados á pesca que propuxo proposto pola Comisión Europea para o novo novo marco orzamentario 2028-2034.
6. Acordar unha moratoria do desenvolvemento da regulación da produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovábeis en instalacións situadas no mar até que as análises e informes que está a desenvolver o IEO sobre os impactos negativos no sector pesqueiro e os ecosistemas mariños estean finalizados.



7. Realizar as accións precisas ante a Unión Europea para lograr que se incremente o TAC da sardiña para 2026, negociar un reparto da cota da sardiña con Portugal para o novo acordo bilateral equilibrado e tendo en conta o número de buques e tripulantes de cada un dos dous Estados, realizar unha nova distribución da cota da sardiña entre as zonas 8c e 9a proporcionada e atendendo ao número de buques e de tripulantes de cada unha delas e eliminar calquera tipo de compravenda das posibilidades de pesca.
8. Manter abertas todas as oficinas do ISM na Galiza, reforzando a dotación de persoal destas para poder prestar os servizos sobre os que é competente de xeito áxil e eficaz. Para iso, proceder á cobertura, de forma inmediata, do persoal facultativo dos centros de sanidade marítima na Galiza para evitar demoras que impidan os embarques. Así mesmo, garantir a oferta de prazas suficientes nos cursos obrigatorios ofertados polo ISM para os traballadores e traballadoras do mar e habilitar un período temporal non menor a seis meses para a formación e a adaptación dos traballadores e traballadoras do mar aos requirimentos do regulamento de Ordenación da Navegación Marítima durante o cal os trámites dixitais agora obrigatorios se continúen a desenvolver por parte das Capitanías Marítimas.
9. Dar cumprimento aos mandatos da Lei de Pesca Sustentábel e proceder a elaborar un Catálogo de Enfermidades Profesionais das persoas traballadoras do mar; promover, mediar e favorecer a consecución de convenios colectivos que garantan condicións laborais dignas ás persoas tripulantes e remitir ás Cortes unha proposta para o establecemento dun procedemento telemático e/ou electrónico que se adapte ás necesidades propias do persoal embarcado que non pode acceder ao sistema de voto por correo pola estancia en alta mar.
10. Reducir o IVE aplicado ao peixe e produtos pesqueiros até 0% por tratarse dun alimento básico e de primeira necesidade dados os beneficios



demostrados que este alimento ten nunha dieta sa e sustentábel, a súa contribución á redución do gasto sanitario, ademais do efecto positivo no aforro das familias e na dinamización económica do sector da pesca, tal e como acreditan numerosos informes e estudos.